

www.mejorsociedadmejorgobierno.org.mx

www.seguridadjusticiaypaz.org



18 de marzo de 2009

LA IZQUIERDA MEXICANA CON UN PIE EN LA “LEGALIDAD” Y CON OTRO EN EL TERRORISMO

Documentos hallados en las computadoras de “Raúl Reyes” con relación a México, han revelado que políticos mexicanos de izquierda al mismo tiempo que en apariencia mantienen una actuación política formalmente legal, participan en acciones terroristas.

Tal es el caso de Rogelio Ortega Martínez, militante del PRD y alto funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

Este sujeto en enero 2002 les pidió a los representantes de las FARC en México, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le prestaran 40 mil dólares y se comprometió a devolver 100 mil. La garantía inicial del préstamo sería que un grupo armado - del cual Ortega Martínez formaba parte - obtendría el pago del rescate por una persona a la que habían secuestrado, así como el acceso que las FARC tendrían a las arcas universitarias, en caso de que el mismo sujeto Ortega Martínez se convirtiera en rector de la Universidad.

En efecto, Rogelio Ortega Martínez participó en las elecciones de rector celebradas en la UAG en marzo de 2002. Quedó en segundo lugar, perdió por escaso margen de votos y estuvo a punto de ganar.

“Olga Marín” y “Marcos Calarcá” comunicaron la petición del préstamo al número 2 de las FARC “Raúl Reyes”. Este autorizó el préstamo, aunque pidió garantías adicionales.

Los correos no señalan el nombre de la persona secuestrada por Ortega Martínez y sus compinches, pero todo parece indicar que se trató de Luis Ávila Marbán, padre del diputado local del PRI, José Luis Ávila López. La víctima fue privada de su libertad el 17 de octubre de 2001 en Huitzoco, Guerrero y liberado el 26 de enero de 2002, tras el pago del rescate (trascendió que fue por un momento de 1 millón de dólares).

En septiembre de 2003 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a integrantes de una banda de secuestradores, que habían cometido plagios en diversas entidades federativas y pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionarios (EPR). Entre los secuestros que estos plagarios cometieron figuraba el de Luis Ávila Marbán.

En un correo de marzo de 2003, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le propusieron a “Raúl Reyes” la participación de las FARC en la comisión de secuestros en México, en asociación con el grupo armado clandestino de Rogelio Ortega Martínez.

Cabe señalar que a partir de 2001 han habido en el Estado de Guerrero decenas de secuestros en lo que la policía tiene sospechas o la certeza de han sido cometidos por grupos terroristas. Asimismo si se va más atrás hay 129 casos de secuestro en Guerrero entre 1986 y 2006, en los que existe la sospecha o la certeza de la intervención de grupos terroristas. Se estima que en todo el país, entre 1999 y 2008, los grupos armados clandestinos han cometido más de 160 secuestros y han obtenido alrededor de 100 millones de dólares en rescates.

Es muy probable que Ortega Martínez y su organización hayan participado en varios de esos plagios, con la asesoría de las FARC, mientras él y sus compinches participaban en política y se beneficiaban de la legalidad.

Rogelio Ortega Martínez a inicios de los años ochenta fue parte de la dirigencia nacional de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), fundada por el terrorista Genaro Vázquez Rojas, muerto en 1972. Esta organización estaba dedicada a cometer secuestros, atracos y asesinatos.

Ortega Martínez también fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guerrero y en 1989 fue de los fundadores del PRD en Guerrero, partido al cual se unió la ACNR, que se mantuvo como una de las facciones perredistas. En 2002, cuando Ortega Martínez contendió por la rectoría de la UAG, contó con el apoyo de la ACNR.

En 2003 Ortega Martínez se alejó del PRD y fue el presidente estatal del Partido México Posible, que participó en las elecciones federales de ese año y no pudo obtener el registro. A partir de 2004 regresó al PRD y en 2005 fue activo participante en la campaña del actual gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca.

En 2006 Ortega Martínez volvió a presentarse como candidato a la rectoría de la UAG (de nuevo con apoyo de la ACNR), pero declinó en favor del candidato Germán Cerón Silverio. Ortega Martínez es mencionado como uno de los posibles aspirantes a la rectoría de la UAG en el proceso de 2010.

Esto, la doble vida de los políticos izquierdistas, es lo que explicaría la infame conducta que la izquierda mexicana ha tenido con relación a la participación de mexicanos en las FARC y la defensa incondicional de estos militantes terroristas.

Lo que los políticos del Partido de la Revolución Democrática y también del Partido del Trabajo y de Convergencia han buscado desde hace más de un año, es el frenar la investigación sobre las FARC en México, precisamente porque se destaparía la cloaca, porque se revelarían cosas como ahora se saben: el sucio doble juego.

¿En cuantos secuestros participó este sujeto?, ¿cuantos dinero obtuvo de ellos?, ¿cuanto de los botines terminaron en manos de políticos del PRD, el PT y Convergencia?

Y si los líderes de estos partidos se han beneficiado del dinero proveniente de secuestros ¿que les impediría recibir dinero del narcotráfico o de un gobierno extranjero, como el Venezuela?

Hace casi un año y como consecuencia del ataque de Colombia a un campamento terrorista en Ecuador, presentamos una denuncia penal en contra de militantes de las FARC que vivían o residían

en México, por los delitos de terrorismo internacional, terrorismo y apología al terrorismo. Algunos de ellos habían estado en el campamento durante el ataque del 1 de marzo de 2008.

Señalamos que esos sujetos no eran meros simpatizantes sino integrantes activos de las FARC, que se preparaban para cometer atentados terroristas en México, si es que no los habían cometido ya.

Nuestra denuncia se basó en información pública, destacadamente los primeros correos que se fueron conociendo de las computadoras de “Raúl Reyes” y que aseguró la fuerza pública colombiana.

Los correos revelaban que los mexicanos caídos en la acción militar del 1 de marzo en Ecuador, así como los sobrevivientes (entre ellos Lucía Morett) eran militantes de las FARC.

Las FARC, su principal protector que es el gobierno de Hugo Chávez, los agentes de influencia éste en toda América Latina y en general la izquierda mexicana y latinoamericana, trataron de desacreditar las informaciones.

Pero en mayo de 2008 y tras un minucioso peritaje, Interpol declaró que los documentos encontrados en los computadores de “Reyes” eran genuinos y no habían sido “fabricados”. Tenían por tanto valor de evidencia en el proceso penal.

Además, en tanto, trascendieron a la prensa nuevas evidencias que probaban que Lucía Morett y otros de sus camaradas ya habían estado antes en otros campamentos de las FARC, que no eran los turistas académicos que aparentaron ser. Con base en esos datos el 13 de mayo de 2008 presentamos una primera ampliación de nuestra denuncia penal.

Días después en Ecuador un juez, a petición de la fiscalía ecuatoriana, dictó una orden de captura en contra de Lucía Morett por delitos contra la seguridad del Estado, en virtud de su presunta pertenencia a las FARC. Pero – convenientemente – para entonces Morett había sido trasladada a Nicaragua. Del país centroamericano, meses después, en diciembre de 2008, Morett se trasladó a México.

En enero de 2009 la fiscalía de Ecuador informó que había emprendido las gestiones ante el gobierno de México para que Morett fuera extraditada. De inmediato la izquierda mexicana reaccionó en defensa de la terrorista prófuga de la justicia ecuatoriana. Por un lado diputados del PRD y Convergencia viajaron a Ecuador para tratar de disuadir a las autoridades judiciales e ignorar la evidencia y, por otro lado, el Partido del Trabajo anunció que postularía a Morett como candidata a diputada.

Esto último revela el grado de la colusión entre el PT y las terroristas FARC y la importancia que éstas conceden a lograr la impunidad de su militante, Lucía Morett. Una diputación es demasiado regalo a la estupidez de una pobre estudiante mexicana que casi por casualidad llegó a un campamento terrorista y tuvo la mala fortuna de que pocas horas después de su arribo, haya sido bombardeado...

Los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia están procediendo en la lógica de las asociaciones delictivas, de defender a ultranza a los correligionarios aunque hayan cometido crímenes, para que resulten impunes y puedan seguir delinquirando.

Carl Von Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Para la izquierda mexicana, al parecer, la política es la continuación de la guerra por otros medios (sin tampoco abandonar la guerra propiamente dicha).

La izquierda en México jamás ha sido leal a la democracia, de la cual tanto se ha beneficiado. Recuérdense las ligas del Partido Comunista con la guerrilla en los años setenta y como se benefició de los rescates de secuestros. Recuérdense los llamados del PRD, tras los ataques del EPR en 1996, a que el ejército mexicano se replegara y se rindiera ante los terroristas. Recuérdense como el asesinato de un perredista en Acapulco, Guerrero en 1999, puso al descubierto que dirigentes perredistas eran al mismo tiempo jefes del ERPI.

No podemos seguir permitiendo este juego sucio. Es inadmisibile que quienquiera tenga un pie en la legalidad democrática y otro en el terrorismo. Si los partidos de la izquierda quieren seguir jugando este juego sucio, deben ser proscritos.

El país vive la peor crisis de inseguridad de su historia. Nunca habíamos sufrido tantos secuestros y con tan extrema crueldad. Los plagiarios ya no se conformaban con una parte del patrimonio de sus víctimas, lo quieren todo. Miles de mexicanos están obligados al pago periódico de extorsiones. Zonas enteras del país están sometidas al poder del crimen organizado y sustraídas al poder del Estado mexicano.

Al gobierno le enardece que se hable de “Estado fallido” en México, pero actúa como la autoridad ejecutiva de un Estado fallido: permite una enorme impunidad, es incapaz de abatir los índices criminales (que van al alza), negocia con los peores criminales, como son los terroristas del EPR y se niega a ejercitar acción penal contra los terroristas de las FARC en México, pese a que hay evidencias suficientes para proceder. Después de un año, la PGR ni siquiera se ha atrevido a llamar a declarar a los militantes mexicanos de las FARC.

¿Como va a mejorar la seguridad si el gobierno se sienta a negociar impunidades con los terroristas y los secuestradores?, ¿como se va a restablecer el orden si el gobierno le tiene pavor a los políticos izquierdistas de doble vida y trata de no molestarlos ni con la palabra?, ¿como va a mejorar la seguridad si los principales partidos políticos le piden al gobierno que no extradite a una terrorista prófuga de la justicia de Ecuador?

Anunciamos que con esta fecha presentamos la segunda ampliación de nuestra denuncia penal de hace un año. Conforme a evidencia previa y nueva estamos exigiendo a la PGR que ejercite la acción penal contra los militantes de las FARC en México. Estamos demandando el arraigo y acusación penal contra Rogelio Ortega Martínez y sus cómplices. Estamos pidiendo se investiguen y castiguen los numerosos secuestros que los primeros y los segundos presumiblemente han cometido.

Si esta vez el gobierno no actúa, si se vuelve a doblar ante una izquierda defensora del terrorismo, entonces ni siquiera tendremos que decirlo nosotros, pues los hechos calificarán solos: el gobierno habrá optado la claudicación ante el crimen organizado, por el “Estado fallido” y por despeñar al país hacia la anarquía y la violencia.

Atentamente.

Guillermo Velasco Arzac
Presidente
Mejor Sociedad Mejor Gobierno AC

José Antonio Ortega Sánchez
Presidente
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública
y la Justicia Penal AC

Jefe de prensa: Cristina Montiel
53-36-17-52 ó 53
044-55-16-53-49-31
mcmj77@yahoo.com.mx